

El fin de una etapa

Una de las ventajas en que más se insiste al valorar la democracia es que, no sólo permite, sino que incluso impulsa y hasta avala el cambio en la cúspide del Estado. Frente a la estabilidad basada en la inmovilidad y, por tanto, en la represión — porque el mundo sí se mueve— que caracteriza a las dictaduras, los ordenamientos democráticos consiguen la estabilidad precisamente con la mudanza y, en consecuencia, no sólo toleran que la sociedad se exprese con libertad, sino que los mecanismos políticos están montados para que los vaivenes sociales —desde el ámbito productivo al que concierne a los valores y mentalidades— se reflejen en las formas que gobiernan. Desde la óptica de la dictadura, la renovación en la cúspide se presenta siempre como algo traumático y arriesgado y, por tanto, indeseable. En cambio, desde un enfoque democrático, lo más natural es que se vaya produciendo paulatinamente un relevo en la composición del poder ejecutivo y del legislativo. La virtud de la democracia consiste en que está concebida para ir a copiando personas e instituciones del Estado a las transformaciones que se produzcan en la sociedad; de ahí que, justamente, su fuerza resida en una estabilidad que proviene del cambio y no de una inmovilidad, siempre forzada.

En este punto, como en algunos otros a los que nos referiremos más tarde, la democracia restaurada en España, empero, no muestra las virtudes que se le atribuyen. En discrepancia con lo que se desprende de la teoría, llaman la atención las dificultades y costos altísimos que conllevan las sustituciones en la cúspide del Gobierno. El acceso de los socialistas al poder —un evento muy positivo que cerraba el ciclo de la transición— ocurrió tras un intento fracasado de golpe militar, que puso en cuestión el modelo de transición hasta

**IGNACIO
SOTELO**

«Llaman la atención las dificultades y costos altísimos que conllevan las sustituciones en la cúspide del Gobierno.»



entonces practicado, suceso que, en fin de cuentas, no me parece demasiado desatinado considerar como la causa última de que se derrumbe el partido artificial que se había armado desde el poder, fusionando parte de la vieja y de la nueva clase política. La llegada de los socialistas al gobierno —un cambio que debiera haber sido la cosa más normal en una democracia que funcione— hubo que pagarlo al altísimo precio del desmoronamiento del partido hasta entonces en el Gobierno. Después de aquel cataclismo, los socialistas han venido gobernando de hecho sin oposición, o por lo menos sin una que implicase la posibilidad de la alternancia, lo que ha facilitado el que pudieran revalidar en dos ocasiones la mayoría absoluta y que se hayan sostenido, como el partido más votado, en las últimas elecciones generales del 6 de junio de 1993. Los socialistas van a cumplir los 12 años en el poder; sin cambiar la persona del presidente de Gobierno, un período considerable, sobre todo si se tiene en cuenta que, al redactar la Ley para la Reforma Política y, dentro de este marco, la Constitución de 1978, lo que se trataba de evitar era un régimen parlamentario excesivamente inestable; de ahí las muchas medidas que se tomaron para afianzar al presidente de Gobierno, figura central en nuestro ordenamiento, que incluye para su fortalecimiento hasta el haber adoptado el modelo alemán de moción de censura constructiva. En efecto, desde la ley electoral hasta la Constitución, son muchos y muy variados los elementos que contribuyen a que se mantenga inamovible el presidente de Gobierno. Si de ello nos hemos felicitado en el pasado, tampoco habrá que echarlo en saco roto en el momento actual.

La primada de la estabilidad. En efecto, si tenemos presente los daños y riesgos que comporta un continuo cambio en la cúspide del Gobierno —la cuarta República francesa y la italiana que acaba de fenecer son a este respecto ejemplos patéticos—, difícilmente se podrá criticar la prudencia de que en este tema dieron prueba las fuerzas políticas en la transición. De la actual democracia española se podrá decir todo menos que peque de inestable, el mayor peligro que parecía cernirse en el horizonte. Además, conviene añadir que las jóvenes democracias con vocación de perdurar se han caracterizado en los comienzos por una llamativa estabilidad gubernamental: así, la larga permanencia de Adenauer al frente del Gobierno y aún la más larga de su partido, la democracia cristiana, o la presencia continua durante más de 40 años de la democracia cristiana en todos los gobiernos italianos. Hace aún pocos años, lo que los italianos más nos envidiaban era que, con un sistema electoral proporcional, aunque corregido, España contara con una sorprendente estabilidad gubernamental.

«Desde la ley electoral hasta la Constitución, son muchos y muy variados los elementos que contribuyen a que se mantenga inamovible el presidente de Gobierno.»



El ejemplo italiano muestra los efectos perniciosos de una estabilidad inestable como la que lograron construir. En política, como en el juego de las siete y media, se pierde por pasarse o por no llegar. Poco sentido tiene recurrir a principios generales —la primacía de la estabilidad o la primacía del cambio—, que suelen tener efectos muy distintos según la coyuntura. En líneas generales, ha sido buena la estabilidad que hemos gozado en el último decenio. Pero el reverso de una estabilidad beneficiosa es que se prolongue cuando se ha agotado el ciclo, y casi por inercia —es la fuerza gravitatoria de los intereses creados— consiga mantener cerradas todas las puertas que debieran dar acceso a una renovación.

Repárese que esta última aseveración contiene dos premisas que están muy lejos de ser evidentes: la primera, que, efectivamente, se haya agotado el ciclo o, si se quiere, formulado con más modestia, que los socialistas estén ya por completo extenuados, sin otra meta estratégica que la de permanecer en el poder. La segunda, que estén cerradas todas las puertas de salida, lo que, a primera vista, no parece el caso español. Los ciudadanos cada cuatro años tienen en sus manos la posibilidad de cambiar el Gobierno, y el partido socialista del presidente González, aun perdiendo la mayoría absoluta, renovó la confianza hace tan sólo un año y, en principio, tiene tres por delante, al menos mientras cuente con los apoyos parlamentarios que necesita.

Claro que, miradas las cosas de cerca, ambas hipótesis no son tampoco tan descabelladas. Los socialistas subieron al poder en 1982, en un mundo que se movía sobre supuestos por completo distintos a los que prevalecen después del desmoronamiento de los regímenes comunistas y, en segundo lugar, la política realizada tampoco puede decirse que haya contribuido a movilizar a los ciudadanos, haciéndoles más conscientes de sus deberes cívicos, sino que, al contrario, la despolitización ha llegado a tal extremo que se ha podido hablar de un "voto cautivo", aunque con argumentos no siempre convincentes. Prefiero no entrar a fondo en estas dos cuestiones que, de seguir las con algún rigor, nos llevarían muy lejos de donde quiero llegar. Pero, para expresar claramente mi opinión, diré que sí pienso que el presidente González, al menos desde hace 4 años, ha acabado su ciclo y, sin embargo, no estoy tan seguro, de que su permanencia se haya debido a mecanismos poco democráticos de manipulación, "voto cautivo", "clientelismo", etcétera: los resultados del 12 de junio aniquilan este tipo de explicación que se había empleado para dar cuenta del triunfo socialista en anteriores ocasiones. Aunque parezca evidente que González no tiene ya otro proyecto que esperar a que mejore la situación para seguir con la misma rutina, tal vez se podría señalar que la falta de un proyecto coherente y realista no es sólo defecto socialista, hasta cabría pensar que se trata de un rasgo característico

«Cuanto más tiempo se mantenga la actual situación, mayores serán los costos sociales y económicos para el conjunto, ya que no cabe otra expectativa para salir de la actual parálisis.»



de la etapa que sigue al fin del enfrentamiento de las dos superpotencias por la desaparición de la una y la fragilidad de la otra.

Los cosíos de la alternancia. Afirmar a estas alturas que se ha acabado un ciclo y que estamos a punto de empezar otro es ya manifestar lo obvio. La cuestión que se plantea es lo que esta vez también nos puede costar la alternancia y ello desde dos puntos de vista: un tiempo precioso, más aún en una situación de crisis, que se pierde en llevar a cabo un cambio tan imparable como imprescindible; segundo, en virtud del tiempo muerto que sea necesario para que se produzca la alternancia, el estado más o menos calamitoso en que pueda quedar el actual partido en el poder. Parto del supuesto de que cuanto más tiempo se mantenga la actual situación, mayores serán los costos sociales y económicos para el conjunto, ya que no cabe otra expectativa para salir de la actual parálisis, sino que se produzca el giro necesario: el centro-derecha accede al poder, o bien resurge, al fin, la izquierda. El que un ministro diga que trabaja a sabiendas de que tiene por delante toda la legislatura es prueba patética de que no es así; porque si la tuviera, no se le pasaría por el caletre el mencionarlo. Pero no sólo se pierde un tiempo precioso en momentos críticos, sino que el que a trancas y barrancas se prolongue un gobierno ya sin aliento ni fuerza para sostenerse por sí mismo debilita al partido en el gobierno. Con el 30% de los votos los socialistas aún podrían ejercer de oposición e incluso recuperarse en un plazo no excesivamente largo. Si en las condiciones actuales, con todos los trucos y concesiones inimaginables, lograsen mantenerse todavía un año en el poder, podrían descender por debajo del 20% y entonces no está dicho que en la oposición no continuase el descenso hasta acercarse a la disolución. Sucede como con una empresa sin posibilidades de recuperación: resulta muy duro cerrarla, tirando por la borda las inversiones realizadas, pero lo es todavía más el mantenerla, sabiendo que las pérdidas irán en aumento. Y nada puede resultar tan nocivo para el futuro de la democracia en España como que la alternancia vuelva a implicar un desmoronamiento del partido gobernante. Hay, sin embargo, una perspectiva partidaria, que consiste obviamente en llegar lo antes posible al poder y, una vez en él, mantenerse lo más que se pueda; hay otra que concierne al sistema en su totalidad y que pone en un primer plano unas veces la continuidad y otras el cambio, para conseguir el mismo objetivo de estabilidad del sistema. La impresión más generalizada últimamente y la que me parece más plausible es que el país necesita ya un cambio en la cúspide y que sólo de manera artificial, y con costos grandes, se puede prolongar la actual etapa.

Hipótesis de trabajo que conlleva en su seno una inseguridad insuperable, al intervenir un factor desconocido, el futuro. Nadie

«Convocar elecciones en octubre sólo tendría sentido para el partido gobernante si pudiera convencerse de que saldría mejor parado que dentro de un año.»



puede saber con certeza cómo estará el país dentro de uno, dos, tres años, ni si los socialistas contarán entonces con mayor o menor apoyo. Claro que si analizamos los resultados electorales desde 1982, se impone con bastante verosimilitud una tendencia a la baja, que se acelera en el último tiempo. Pero el presidente y parte de su partido no cesarán de atrincherarse en la opinión de que por razones muy específicas —haber tocado fondo en la recesión y no haber podido ocultar dos escándalos de envergadura— el sosten social del Gobierno habría llegado a sus mínimos, y que, por tanto, desde ahora, a poco bien que se hagan las cosas, lo más seguro es que se vaya consiguiendo una paulatina recuperación. En consecuencia, la fórmula más recomendable consiste en distanciar las elecciones generales lo más que se pueda. Todos los Gobiernos pasan en una legislatura por períodos en que cuentan con un soporte popular mayor o menor. No cabe esperar que siendo facultad exclusiva del presidente el disolver las Cortes antes de término, sin estar muy obligado a ello, lo haga antes de plazo y mucho menos en un momento en que sabe que su apoyo es claramente minoritario y aún le queda tiempo para una posible recuperación. Convocar elecciones en octubre sólo tendría sentido para el partido gobernante si pudiera convencerse de que saldría mejor parado que dentro de un año y que, si pudiese sostenerse hasta el final de la legislatura, los resultados aún serían peores. Pronóstico que sólo podrá confirmar o falsificar el tiempo, y aun si se mantuviese la actual tendencia a la baja, dentro de un año cabría todavía argumentar que la recuperación no habría invertido la tendencia, pero que estaría a punto de hacerlo. Cuántas veces las encuestas no han dado por derrotado al canciller Helmut Köhl y luego, en el último momento, ha logrado salir adelante.

Escenarios alternativos. Dos conclusiones provisionales podrían sacarse. La primera, con un valor meramente hipotético, que el tiempo trabaja en contra de los socialistas. La segunda, mucho más sólida, que el presidente González procurará retrasar las elecciones generales todo lo que pueda. Pienso que ambas definen la actual situación. Sobre su ulterior evolución cabe construir dos escenarios alternativos. El primero, que el PSOE no esté dispuesto a suicidarse junto con el jefe. El presidente no tiene otra opción que empeñarse en permanecer al precio que sea en el Gobierno. No supo preparar el relevo cuando todavía estaba a tiempo, dejando con ello marcados los límites de su capacidad de estadista. Ahora bien, cuanto mayores sean las dificultades y más rápido el descenso, González se sentirá más indispensable para cambiar el sentido de la tendencia. Únicamente la derrota en las urnas le convencerá de que hace tiempo que había acabado su ciclo, pero mientras las encuestas no le

«La pregunta que concierne al futuro de la democracia en España es si el partido seguirá al jefe en la caída, y me temo que sí.»



sean favorables, y cada vez lo serán menos, mayor el interés de retrasar las elecciones.

La pregunta que concierne al futuro de la democracia en España es si el partido seguirá al jefe en la caída, y me temo que sí. Cuanto más baje la intención de voto, menor el margen de maniobra y mayor la necesidad de formar una pina a la espera del milagro. No faltarán en todo el tiempo comentaristas que descubran todos los días señales de que el milagro esperado está a punto de producirse. Además, como el liderazgo ha sido en torno a un caudillo, nadie ha podido significarse como posible sucesor. El partido, al no tener una estructura democrática, no ha contado con una directiva colegiada, ni con personas intercambiables para la función de presidente. Si ahora alguien se ofreciera para este cometido se atraería la animadversión del líder y de los demás posibles herederos. El único que ha conseguido hacerse de una imagen propia, Alfonso Guerra, no es presentable como candidato presidencial y sabe que si se impusiera provocaría la escisión del partido. Para complicar aún más las cosas, tampoco parece factible que alguien logre proclamarse candidato sin su apoyo; pero el que cuente con él, por lo mismo, aparecerá como inaceptable a la otra parte del partido.

En estas condiciones, el presidente puede apostar fuerte ante cualquier amago de rebeldía interna. La única forma de enmascarar una revuelta sería justificarla como un giro a la izquierda. Pero todo intento en esta dirección de contar con alguna posibilidad de éxito llevaría consigo el que el presidente, para abortarlo, convocase elecciones generales en las peores condiciones inimaginables para el POSE. Se comprende que nadie esté dispuesto a lanzarse por una vertiente que conduce directamente a la catástrofe que se quiere evitar. Los beneficiados de un salto a la izquierda del PSOE serían, por una parte, el centro derecha, como la alternativa más sólida, y por otra IU, que con este empujón se aproximaría, si es que no supera al voto socialista. El segundo escenario es más verosímil. Que los actuales socios dejen de apoyar al presidente. Llama la atención, en primer lugar, la ambigüedad de este apoyo; no se trata ni de una coalición de Gobierno —el nacionalismo catalán no quiere entrar en el Gobierno— ni siquiera hacer un pacto de legislatura, sino que al margen del Parlamento y a puerta cerrada, los líderes de ambos partidos negocian sin que hagan público en qué términos. Es el último paso que cabía dar para que los líderes hicieran patente todo su desprecio por la opinión pública del país, organizaciones políticas y grupos parlamentarios.

El que la negociación sea secreta y al más alto nivel me parece altamente significativo. Por un lado, queda bien patente que el nacionalismo catalán, por razones de principio, no quiere gobernar en Madrid. Importa mucho no confundirse en este punto, Pujol no es Cambó. Preguntado el presidente de la Generalitat qué pensaba sobre la

«Es difícil desprenderse de la idea de que Pujol tratará de sacar todo lo que pueda para afianzar la independencia de Cataluña y que, cuando crea agotado el filón, dejará caer al Gobierno.»



posibilidad de convertirse con el apoyo del Partido Popular en presidente del Gobierno español, contestó que él era el presidente de la Generalitat de Cataluña y como catalán había colmado sus aspiraciones, y no se planteaba llegar a ser presidente del Gobierno español o del Gobierno francés. Indudablemente tiene un valor simbólico el que un nacionalista catalán forme parte de un Gobierno español, y no creo que suceda, al menos mientras que Pujol continúe siendo el líder indiscutible de su partido. Si él no aspira a ser presidente del Gobierno español, tampoco está muy dispuesto a que lo pueda ser uno de los suyos, y para evitar esta posibilidad lo mejor es impedir que llegue a ministro un correligionario. Cabría, desde luego, que se acordase un pacto de legislatura, pero en este caso todas las ventajas serían para los socialistas que podrían asegurarse un apoyo a mediano plazo. En cambio, si se negocia día a día y caso por caso, desde la amenaza implícita de que si no se llega a un acuerdo dejarían caer al Gobierno, el mayor provecho es para el nacionalismo catalán. El que el presidente González haya aceptado un apoyo puntual, sin garantía alguna para el futuro más inmediato, muestra toda su debilidad y dependencia. Si a ello añadimos el carácter secreto de la negociación, la sospecha de que los socialistas están dispuestos a hacer grandes concesiones al nacionalismo catalán a cambio de su apoyo o, como se ha dicho, se han convertido en sus rehenes, adquiere alguna verosimilitud. El apoyo de CyU al Gobierno muestra así, corresponda o no con los hechos —en política importan sobre todo las apariencias, o dicho de otro modo, lo que se cree es lo que es—, un tinte de presión en favor de un salto cualitativo hacia una estatalización propia de Cataluña que no es nada bueno para la consolidación del Estado de las Autonomías y con él la de la democracia en España. Es difícil desprenderse de la idea de que Pujol tratará de sacar todo lo que pueda para afianzar la independencia de Cataluña y que, cuando crea agotado el filón, dejará caer al Gobierno, impresión que si comparten los socialistas les obligará a marchar a paso lento en las cuestiones autonómicas, para no agotar el agua del pozo, pero tampoco tan pausado que levante la cólera de los sedientos. La actual situación desprestigia a los socialistas y, lo que es más grave, arrastra en el desprestigio a la estructura autonómica del Estado. No temo tanto el nacionalismo catalán como la reacción que este comportamiento provoque en un remozado nacionalismo español de derechas.

Como difícilmente puedo imaginar que el modo hasta ahora practicado de relacionarse socialistas y nacionalistas catalanes a la larga funcione, según vaya descendiendo la intención del voto socialista, por un lado, mayor será la oposición por parte del partido socialista a esta forma de asociación, y, por otro, minoría catalana podrá menos justificar un apoyo que levanta una ola de anticatalanismo, que, justamente, es lo peor que nos podría ocurrir. Pero no nos engañemos, la razón principal de que se prolongue la actual

«Los casos Roldan y Rubio superan con mucho lo tolerable al minar instituciones fundamentales del Estado, y en ambos casos la responsabilidad política recae directamente en la persona del presidente.»



etapa radica en la mera aritmética electoral. Los ciudadanos, con no pocas dudas y resquemores, en las últimas elecciones generales al final prefirieron lo malo conocido a la alternativa por conocer. Los resultados del 6 de junio no permiten otra combinación que mantener la actual coalición — una entre los dos grandes partidos mayoritarios resultaría insoportable para el nacionalismo periférico— pero todo parece indicar que a C y U le cogió de sorpresa y no se puede decir que en un principio le entusiasmara. Pero, insisto, al comienzo de la legislatura no había otra posibilidad si se quería impedir —y en esto si que la minoría catalana no tenía, ni tiene, la menor duda— la otra alternativa aritméticamente posible, una coalición PSOE-IU, eventualidad que hay que descartar por la oposición tenaz de una buena parte del PSOE, aquella que lidera González.

En las elecciones europeas se ha producido un vuelco que, por lo que respecta al voto urbano y juvenil, el más superficial de los análisis nos lleva a reputarlo de irreversible. Poner punto final a una etapa que se muestra agotada implica disolver el actual Parlamento que, aunque lo pida a voces el partido mayoritario de la oposición, obviamente no interesa al que está en el gobierno ni a los nacionalismos periféricos. Los vascos por su parte, aunque, dada su debilidad parlamentaria, poco puedan hacer, pondrán toda la carne en el asador para que, ante el peligro de que coincidiesen con las autonómicas, no se celebren elecciones generales en otoño y, a parte de que esta coincidencia se consideraría degradante para las elecciones vascas, seguro ue influiría en sus resultados y no precisamente a favor del PNV.

La Carga de la Corrupción. A esta incertidumbre se añade un hecho contundente que marca con su sombra todo el ciclo que acaba: la corrupción. Otra cuestión en la que la realidad difiere de la teoría. La transparencia que se supone en una democracia, así como la exigencia de que se asuma la responsabilidad política correspondiente al menor indicio, debe evitar la corrupción. Su existencia es prueba cabal de que la democracia española no se distingue por su transparencia —el secretismo favorece la corrupción, como confirma lo ocurrido en el Ministerio del Interior— ni, desde luego, porque se sepa exigir las responsabilidades políticas a que dé lugar.

Los casos Roldan y Rubio superan con mucho lo tolerable al minar instituciones fundamentales del Estado, y en ambos casos la responsabilidad política recae directamente en la persona del presidente. El canciller Willy Brandt dimite porque en su entorno se descubre un espía de la Alemania oriental. El presidente español no se da por aludido, pese a que haya mantenido al frente de la Guardia Civil a un auténtico gángster, cuya actividad no hubiera pasado inadvertida, si no hubiera existido una corrupción generalizada. El presidente, sin

«Una democracia es mucho más que elecciones, aunque sea inconcebible sin ellas.»



asumir las responsabilidades que le atañen, mira a otro lado y se muestra sorprendido, él tan puro e ingenuo, víctima de la falsedad humana que le ha tenido engañado respecto a una corrupción que él negaba que existiese, hasta el punto de que, como única solución, amenazase con medidas draconianas en la prensa para que dejarán de publicar tanta "basura calumniosa". Una tan inmensa ignorancia del presidente llama sobre todo la atención, porque ya se habían encendido todas las luces rojas y el país entero estaba al cabo de la calle de que ocurría lo que realmente ocurría. Ya en abril de 1990, en una encuesta de DIARIO-16, a la pregunta de "¿Cree Ud. que en la política española hay corrupción?", el 82% contestó afirmativamente, pero el presidente seguía perteneciendo a esa minoría que de nada se daba cuenta, incluso cuando las encuestas en los 90 ya señalaban la corrupción como uno de los grandes males del país. Ni siquiera reaccionó cuando, el 26 de junio de 1991, el Rey, en un discurso en Granada que fue ampliamente comentado, aludió a "la desidia y la corrupción que han malogrado tantas cosas en España". Todos comprendimos, menos el presidente que seguía empeñado en que las historias de Ibercor eran infundios de la prensa. En efecto, hace ya bastante tiempo que el presidente tendría que haber dimitido por su incapacidad de enterarse de lo que ocurre a su alrededor. Persona tan ingenuamente angelical no sirve para presidir un Gobierno.

El juego táctico ha sido perfecto. La oposición y la opinión pública piden la dimisión del presidente por escándalos que ponen en tela de juicio el prestigio de instituciones esenciales del Estado. El presidente no se da por aludido y deja caer que hay unas elecciones europeas y andaluzas a la vista. Una vez que queda patente que ha perdido la confianza del electorado, y que la oposición comete el error de no seguir pidiendo la dimisión por la responsabilidad política que se deriva de los escándalos, sino porque no cuenta ya con la mayoría del país, el presidente, una vez que se cree libre de la necesidad de dimitir por los casos de corrupción, cargado de razón alega que las elecciones celebradas lo han sido al Parlamento Europeo y que su resultado no modifica la relación de fuerzas en el español. Con ello ha eliminado de la discusión la razón para dimitir —y ésta sí de peso, la responsabilidad política que le corresponde por los escándalos de corrupción— que hubiera continuado siendo efectiva, aunque hubiera ganado las elecciones. Una democracia es mucho más que elecciones, aunque sea inconcebible sin ellas. Y eso más que constituye a una democracia —cultura política democrática, respeto del Derecho, independencia de los poderes estatales— es justamente lo que hemos echado de menos en la etapa que acaba. La tarea de construir un Estado democrático, de derecho y que funcione está aún por cumplir.